



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Demandante: ALBERTO CARLOS MARIO MONTOYA OSORIO
Demandados: ACP COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y
PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 010 2019 00730 01
Sentencia: S-327

AUTO

En atención a la escritura pública 1326 del 11 de mayo de 2022 allegada al expediente, así como la inscripción en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S., se le reconoce personería como apoderado judicial de PORVENIR S.A. al Dr. OCTAVIO ANDRÉS CASTILLO OCAMPO, T.P. 380.131 del C. S. de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el día 23 de mayo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

ALBERTO CARLOS MARIO MONTOYA OSORIO demandó a PROTECCIÓN S.A., a PORVENIR S.A., a COLFONDOS S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además se condene a las demandadas a las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que fue trasladado del Régimen de Prima Media con prestación definida al de Ahorro Individual con Solidaridad; que el fondo privado de pensiones omitió su obligación de buen consejo al no brindarle una información clara y completa de los beneficios, contras y/o consecuencias del traslado; y que su solicitud de traslado a COLPENSIONES ha sido negada por las entidades demandadas.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la afiliación del demandante a esa entidad y el posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual, indicando que no le consta lo demás por tratarse de situaciones relacionadas con terceros que deben ser probadas en el curso del proceso. Se opuso además a las pretensiones y como excepciones propuso inexistencia de la obligación demandada, falta de derecho

para pedir, buena fe, prescripción, inexistencia de nulidad de traslado de régimen pensional, inexistencia de la obligación de reconocer la afiliación al RPM por falta de legitimación en la causa por pasiva e imposibilidad de condena en costas.

COLFONDOS S.A. también acepta la afiliación inicial al Régimen de Prima Media y el posterior traslado al RAIS mediante la suscripción del respectivo formulario el 7 de septiembre de 1994, indicando que no le consta lo demás por tratarse de situaciones relacionadas con otras entidades. Señala que su afiliación a esa entidad se produjo con fundamento en una decisión libre y voluntaria. Se opuso igualmente a las pretensiones y como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al RAIS, ratificación de la afiliación, compensación y pago.

PROTECCIÓN S.A. acepta la afiliación del demandante al RAIS aclarando que la decisión fue adoptada luego de recibir una asesoría objetiva e integral que lo llevó a que firmara de forma libre y voluntaria el formulario de vinculación. Se opuso además a las pretensiones de la demanda al considerar que nos encontramos ante un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento, realizado de forma libre y espontánea. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, falta de juramento estimatorio de perjuicios como presupuesto procesal e inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y la prima del seguro previsional.

PORVENIR S.A. solamente acepta la afiliación del demandante a esa entidad, advirtiéndole que la misma se realizó luego de entregarle una información completa que para esa época se hacía de forma verbal, cuya manifestación de voluntad se dejaba plasmada en el respectivo formulario de vinculación. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda y como excepciones propuso prescripción, cobro de lo no

debido por ausencia de causa, inexistencia de la obligación y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 23 de mayo de 2022, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, i) DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por el demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por COLFONDOS S.A. así como los posteriores traslados dentro de ese mismo régimen, ORDENÁNDOLE a PROTECCIÓN S.A., trasladar a COLPENSIONES el saldo existente en su cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros; ii) ORDENÓ a COLFONDOS S.A., PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., la devolución de las cuotas de administración, porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima y primas de seguros previsionales, recibidos durante el tiempo que el demandante estuvo afiliado a cada entidad, junto con la respectiva indexación; iii) ORDENÓ a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas y reactivar la afiliación del demandante al RPMPD; y iv) CONDENÓ en costas a PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A., fijando como agencias en derecho el equivalente a \$1`000.000 a cargo de cada una de ellas.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, el apoderado de COLPENSIONES presentó recurso de apelación indicando que no se probó que se haya afectado el acto voluntario de querer estar en el Régimen de Ahorro Individual realizado por el demandante y se evidenció la voluntad de permanencia, lo que se reafirmó con el gran número de semanas cotizadas con posterioridad y por cuanto su conocimiento de los fondos privados y públicos era amplio y suficiente. Solicita se adicione la sentencia de primera instancia en el sentido de reintegrar el total de las cotizaciones y que si la sumatoria de todos estos conceptos que se ordenan trasladar resultan inferiores al valor total del aporte legal

correspondiente más los rendimientos que se hubieran generado en caso de que el demandante hubiera permanecido en el RPM, sean los fondos privados quienes asuman la diferencia.

A su turno, la apoderada de PORVENIR solicita reconsiderar las posturas expuestas por el juez de instancia teniendo en cuenta que el demandante, como obra prueba en el expediente y así mismo en el interrogatorio de parte, recibió la información suficiente y oportuna en relación con su afiliación a COLFONDOS. El demandante tenía información con relación a varias de las características que explicó y manifestó saber, entre esos la posibilidad de pensionarse de manera anticipada y conocía características de Régimen de Ahorro Individual y que fue en razón de estas que se movilizó constantemente entre este régimen. Solicita se revise la decisión y en su lugar se revoque la sentencia de primera instancia y con esto las órdenes impartidas a PORVENIR de devolver los emolumentos de su propio patrimonio con relación a los gastos de administración y seguros previsionales durante el tiempo que estuvo afiliado a PORVENIR, porque estos descuentos fueron hechos de manera legal y no de manera caprichosa.

La apoderada de PROTECCIÓN S.A. menciona que el formulario de vinculación es un documento al cual no se le puede restar valor probatorio, pues la información se brindaba de manera verbal, ya que era requisito principal para la época de la afiliación. Hace mención a la prohibición en que se encuentra inmerso el demandante establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, la cual menciona la posibilidad de traslado cuando se trate de una persona que se encuentra a menos de 10 años de pensionarse. Señala igualmente que se deben tener en cuenta los actos de relacionamiento y la intención de permanecer al régimen que se demuestra con el traslado a las diferentes administradoras del sistema. En el caso concreto, el señor ALERTO CARLOS MARIO recibió una asesoría adecuada y completa por las AFP PROTECCIÓN, entidad que realizó una re asesoría incluyendo

proyecciones pensionales para que tuviera pleno conocimiento de las implicaciones relativas al régimen, este acto demuestra que el demandante participó activamente durante su tiempo de cotización a esa entidad, por lo que no es lógico concluir que desconocía las características e implicaciones de la pensión que obtendría en el RAIS.

Respecto a los gastos de administración y seguros previsionales, durante todo el tiempo que el demandante estuvo afiliado a la AFP PROTECCIÓN la misma ha gestionado el dinero con el mayor cuidado y la mayor diligencia posible lo cual se puede confirmar en los rendimientos financieros, sin que se pueda desconocer que el bien administrado produjo unos frutos y unos rendimientos. De ordenarse esa destitución se estaría constituyendo un enriquecimiento sin justa causa a favor del demandante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término del traslado concedido a las partes, el apoderado de COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión a través de los cuales solicita se revoque la sentencia en tanto la parte demandante no logra acreditar los supuestos de hecho y de derecho para la declaratoria de la ineficacia del traslado al RAIS. De mantenerse la decisión, solicita se mantenga igualmente la orden de devolución de la totalidad de aportes sin ningún descuento tal y como ha sido establecido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

La parte actora se pronunció solicitando que las demandadas sean condenadas en costas en caso de que se dispongan confirmar en su integridad la sentencia adoptada en primera instancia.

El apoderado de PORVENIR S.A. señaló que no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual, pues la decisión de la parte actora se realizó de

forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley. Asegura que al momento de realizar el traslado cumplió con su deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993. De mantenerse la declaratoria de ineficacia de traslado, solicita no se condene al traslado de los dineros descontados por gastos de administración, especialmente por tener una destinación específica conforme lo dispone el artículo 20 de la ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por los apoderados de las entidades codemandadas a través de sus respectivos recursos de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en lo no recurrido, con el objeto de salvaguardar los intereses de COLPENSIONES, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación del señor ALBERTO CARLOS MARIO MONTOYA OSORIO realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que cada entidad queda en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** ALBERTO CARLOS MARIO MONTOYA OSORIO nació el 13 de diciembre de 1959; **(ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 30 de septiembre de 1985, completando en esa entidad un total de 422.14 semanas de cotización; **(iii)** el 7 de septiembre de 1994 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP COLFONDOS S.A.; **(iv)** posteriormente se trasladó a la entonces AFP HORIZONTE S.A. según formulario de vinculación del 22 de febrero de 2001; y **v)** posteriormente se trasladó a la AFP PROTECCIÓN S.A. según formulario del 14 de abril de 2014, entidad en la que se encuentra vinculado en la actualidad.

Lo que pretende el demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS, administrado en este caso por la AFP COLFONDOS S.A., y que, en consecuencia, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto importa reiterar, tal y como se ha dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación. Adicionalmente, se ha establecido que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que el afiliado no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba que acredite que esa obligación sí se cumplió.

Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años, como ha ocurrido por ejemplo en las sentencias SL 12136 de 2014, SL 17595 de 2017, SL 1421 de 2019, SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 2611 de 2020, SL 1741 de 2020, SL 1741 de 2021, SL 3537 de 2021 o más recientemente la SL 1055 del 2 de marzo de 2022 y la SL 2058 del 4 de mayo de 2022, entre muchas otras. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. Nº 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial citado se pueden evidenciar una serie de ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) no es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no existen pruebas que permitan tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo

privado incumplió su deber de información al afiliado, al no suministrarle, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación, no puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento.

Además, del interrogatorio de parte que le fuera practicado al afiliado, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información para el preciso momento en el que se produjo el cambio de régimen pensional. Si bien pudo haber recibido algunas explicaciones generales acerca del funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual y los rendimientos que generarían los aportes acumulados en su cuenta de ahorro individual, ello no significa una asesoría completa, clara, detallada y precisa de todos los alcances de su decisión. Además, el hecho de que en la actualidad tenga ciertos conocimientos específicos del funcionamiento del sistema, especialmente del RAIS, tampoco implica entender que la entidad cumplió en aquella época con su obligación de información, pues en reiteradas ocasiones el señor MONTROYA OSORIO aclaró que sus conocimientos fueron adquiridos con ocasión de la situación que ha estado viviendo en los últimos años.

Tampoco es de recibo el argumento planteado por la AFP PORVENIR S.A. relacionado con que el actor se trasladó dentro del mismo RAIS,

lo que demostraría su intención de permanecer en ese régimen. Y no lo es porque al respecto también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral en múltiples providencias como la SL 5280 del 3 de noviembre de 2021, rad. 85801 en la que sostuvo claramente que *"... los traslados posteriores de un afiliado no pueden convalidar la actuación viciada en el traslado inicial, y como se ratificó en la sentencia CSJ SL1688-2019, las falencias en el suministro de información completa, veraz y efectiva sobre las consecuencias de un traslado, que pueden ocasionar su ineficacia, se deben examinar en el momento mismo del traslado y no con posterioridad"*.

Ahora bien, tampoco se comparte el argumento según el cual la re asesoría brindada al demandante habría saneado cualquier irregularidad presentada en el acto inicial de traslado, en la medida que la obligación del fondo privado era demostrar, que en ese primer momento, entregó toda la información necesaria para adoptar una decisión informada y evidentemente en este caso ello no ocurrió, lo que implica que sea procedente dar aplicación a lo establecido en el art. 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *"La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador"*.

Esa consecuencia, que afecta directamente el origen del acto, esto es, como si éste no hubiera existido, implica que todas las actuaciones surtidas en el interregno se tendrían así mismo como ineficaces, incluyendo las afiliaciones a otras AFP en caso de existir, así como las

Al respecto, la propia Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado desde la sentencia SL 1688 del 8 de mayo de 2019, rad. 68838, en donde, al analizar varias cuestiones, se

ocupó de referirse sobre la consecuencia que genera una re asesoría posterior brindada por la AFP a la que estuviera afiliado. En aquella oportunidad sostuvo:

“... si bien la AFP brindó a la actora una reasesoría el 26 de noviembre de 2003, en virtud de la cual se concluyó la inconveniencia de continuar en Protección S.A., la Sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado ...

“... la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información.”

Tal criterio ha sido reiterado en sentencias SL 2877 de 2020, SL 1942 de 2021, SL 1949 de 2021 y más recientemente en la SL 1729 del 27 de abril de 2022.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia, sin que tampoco sea de recibo el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frete al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito *“... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad*

requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

Devolución cuotas de administración y demás conceptos.

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, tema cuestionado en el recurso de apelación de las distintas AFPs, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.” (Resaltado por la Sala)*

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA.

Costas en esta instancia por haber resultado vencidas en el recurso, a cargo de PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 '000.000, distribuidas entre ambas en partes iguales.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el día 23 de mayo de 2022.

Costas en esta instancia por haber resultado vencidas en el recurso, a cargo de PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 '000.000, distribuidas entre ambas en partes iguales.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **01cc7564f92d8126eddaadec5932dc66d8345396c9f324e45ac5065f73549cf9**

Documento generado en 15/12/2022 11:59:54 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>